



# Desigualdad extrema

Josefina Leroux

03 Sep. 2015

Ni las reformas estructurales, el nuevo Gabinete de Peña Nieto o las cifras de su Tercer Informe anuncian un cambio de segundo orden, uno que vislumbre abatir los viejos problemas en nuestra Nación.

En el estudio "Desigualdad Extrema en México. Concentración del Poder Económico y Político", publicado por la organización Oxfam México en junio pasado, el economista Gerardo Esquivel afirma que nuestro país padece un círculo vicioso de desigualdad, bajo crecimiento y pobreza.

México es la decimocuarta economía del mundo, sí, pero cohabitan en éste 45 millones de pobres.

La calificación promedio es la del niño que no estuvo en el experimento, decía mi maestro Gustavo Fernández. El promedio que destaca a nuestro país está dado por la cantidad de millones ganados por el 1 por ciento de la población que prorratea la miseria.

Ese 1 por ciento de la población recibe el 21 por ciento de los ingresos del País, según datos del mismo Oxfam, mientras que para la mayoría el PIB per cápita sólo ha tenido un crecimiento de 1 por ciento a tasa anual en los últimos 18 años.

Aun así, el Presidente Peña presume la economía del País evadiendo el problema de la desigualdad avalado por las leyes. Debido a la deficiencia de políticas públicas, existen monopolios que hacen imposible la competencia.

Respecto a la educación, las clases desprotegidas no tienen acceso a escuelas de calidad. El 80 por ciento de las escuelas públicas no cuenta con servicio de internet y el 61.2 por ciento no tiene equipo de cómputo. Pero muchas aulas tampoco tienen techo, piso de cemento ni agua potable.

El estudio "(Mal) Gasto; Estado de la Educación en México 2013", que realizaron las organizaciones Mexicanos Primero y México Evalúa, encontró que el 60 por ciento de las escuelas públicas no reúne las condiciones mínimas para fines educativos. El 46 por ciento de los planteles no tiene drenaje y el 31 por ciento no cuenta con agua potable.

Pero aunado a las pobres condiciones físicas, el 48 por ciento de maestros evaluados reprueba los exámenes básicos (SEP, 2015) y condena a sus alumnos a una educación precaria que se reflejará en un trabajo y salarios semejantes, la mayoría de las veces de por vida.

Otra desigualdad: la población rural carece de los servicios de las zonas urbanas.

El 60 por ciento de los pobres extremos del País radica en localidades rurales y la tendencia se mantiene invariable desde hace dos décadas (Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad, elaborado por Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural).

Los que "emigran" a las urbes trabajan generalmente en subempleos, con subsalarios, sin prestaciones ni derechos. Todos los programas públicos, hasta ahora, han sido insuficientes para resolver la falta de oportunidades que sufren las poblaciones del campo.

Una más es la desigualdad de los hombres versus las mujeres.

De acuerdo con el Plan Estratégico 2014-2017, se debiera asignar particular importancia a los grupos poblacionales que experimenten las mayores desigualdades y exclusión en cuanto al acceso a las oportunidades y al logro de los resultados, especialmente a las mujeres y los hogares encabezados por ellas, aproximadamente el 33 por ciento de éstos (Inegi).

En 2012, las mujeres representaban el 51.2 por ciento de la población, según cifras de Conapo; sin embargo, el Índice de Desigualdad de Género refleja tres dimensiones en las que las mujeres pueden experimentar desventajas respecto de los hombres: salud reproductiva, empoderamiento y participación en el mercado laboral (cenapred.unam.mx).

Ni siquiera en la función pública la cuota de género obligada por las leyes de paridad logra que las mujeres tengan las mismas oportunidades. Una muestra es el Gabinete del Presidente Peña.

La desigualdad tal vez más onerosa es la resultante del abuso de poder y corrupción de funcionarios públicos, cuyo enriquecimiento ilícito, amparado por sus fueros y tráfico de influencias, es un golpe bajo a la ciudadanía.

No obstante los escándalos y evidencias publicadas, la deshonestidad permanece impune pese a la creación de supuestos mecanismos anticorrupción que finalmente resultan simulaciones legaloides.

Es precisamente un Estado legaloide, permitido por el Congreso, los partidos y la misma

ciudadanía, lo que favorece las desigualdades, inconscientes todos de que los excluidos, los descalificados, los tratados injustamente pueden ser cualquiera en un momento dado.

Mientras se toleren las desigualdades, el Estado de derecho es inexistente como no sea en los discursos, y sin éste en la práctica, es imposible la democracia, el progreso, el bien común o la paz.